



Asamblea General

Distr. general
8 de noviembre de 2012
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal

15º período de sesiones

Ginebra, 21 de enero a 1º de febrero de 2013

Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos

Israel*

El presente informe constituye un resumen de 23 comunicaciones de interlocutores¹ para el examen periódico universal. El informe sigue las directrices generales aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en su decisión 17/119. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. De conformidad con la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, cuando procede se incluye una sección separada para las contribuciones de la institución nacional de derechos humanos del Estado examinado acreditada en plena conformidad con los Principios de París. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. El informe se ha preparado teniendo en cuenta la periodicidad del examen y los acontecimientos ocurridos durante ese período.

* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

I. Información proporcionada por otros interlocutores

A. Antecedentes y marco

1. Alcance de las obligaciones internacionales

1. NGO Monitor indicó que Israel había levantado una barrera de seguridad para preservar el derecho a la vida de los israelíes (ya fueran judíos, cristianos o musulmanes) a raíz de la campaña palestina de atentados suicidas con bomba contra civiles israelíes².

2. La comunicación conjunta 4 (JS4) observó que, en mayo de 2012, el Tribunal Supremo había mantenido en vigor el estado de emergencia, y pidió a Israel que levantara el estado de emergencia³.

2. Marco constitucional y legislativo

3. La JS4 señaló que el sistema jurídico de Israel no contemplaba el concepto de igualdad constitucional. Instó a Israel a que aplicara las recomendaciones en materia de igualdad y discriminación formuladas por los órganos de tratados⁴.

3. Infraestructura institucional y de derechos humanos y medidas de política

4. La JS4 se refirió a la recomendación del primer ciclo del EPU⁵ sobre el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos de conformidad con los Principios de París, que Israel no había atendido, y exhortó a Israel a que estableciera dicha institución⁶.

B. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos

5. Amnistía Internacional (AI) señaló que, después de que, el 22 de marzo de 2012, el Consejo decidiera enviar una misión de estudio para que investigara las repercusiones de los asentamientos israelíes, Israel había declarado la suspensión de la cooperación con el Consejo⁷.

1. Cooperación con los órganos de tratados

6. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) indicó que Israel no había entregado el informe periódico inicial en virtud del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía que debía presentar en 2010. Además, señaló que Israel debía proporcionar la información complementaria solicitada por el Comité de Derechos Humanos en 2011⁸.

2. Cooperación con los procedimientos especiales

7. La CIJ señaló que Israel no había cursado una invitación permanente a los mecanismos de procedimientos especiales y tenía pendientes cinco solicitudes de visitas al país⁹.

8. La Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS) recomendó a Israel que cursara una invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, en particular a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación¹⁰.

C. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario aplicable

1. Igualdad y no discriminación

9. El Centro Mossawa señaló que Israel privilegiaba a los ciudadanos judíos sobre los no judíos mediante políticas de Estado, medidas legislativas, decisiones judiciales e instituciones oficiales, poniendo en peligro la condición de ciudadanía y la defensa de la igualdad a escala nacional. Instó a Israel a que modificara sus leyes fundamentales y su legislación para incluir el principio de no discriminación¹¹.

10. El Centro Mossawa exhortó a Israel a que combatiera la proliferación de actos y manifestaciones racistas contra la minoría árabe, condenando las declaraciones tanto de los funcionarios públicos como de los líderes políticos y religiosos, y aplicando medidas apropiadas¹².

11. NGO Monitor afirmó que todos los ciudadanos de Israel gozaban de los mismos derechos¹³.

12. Ir Amim informó de que a 300.000 palestinos residentes en Jerusalén no se les reconocían todos los derechos civiles¹⁴. Habían recibido un permiso de residencia permanente, basado en un censo de la población llevado a cabo después de la guerra de 1967, pero no eran ciudadanos israelíes ni tenían pasaporte israelí. La Ley de ciudadanía de 1952 preveía la posibilidad de obtener la ciudadanía individual, pero no se aplicaba con carácter universal a todos los residentes de Jerusalén Oriental, que tienen identidad palestina, pero no pasaporte palestino (a diferencia de los residentes de la Ribera Occidental); y, aunque poseen pasaporte jordano, no fueron ciudadanos jordanos de pleno derecho hasta 1988¹⁵.

2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona

13. AI indicó que en Israel seguía existiendo la pena de muerte por traición en tiempos de guerra, crímenes contra el pueblo judío, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Con arreglo a las órdenes militares aplicables en el territorio palestino ocupado, la pena de muerte se mantenía para determinados delitos. AI instó a Israel a que aboliera la pena de muerte para todos los delitos¹⁶.

14. AI mostró preocupación por que se siguieran infligiendo torturas y otros malos tratos durante las detenciones y los interrogatorios, incluso a niños. AI señaló que el Tribunal Supremo falló en 2009 que la presión psicológica, ejercida mediante amenazas a los familiares de los detenidos, estaba prohibida. Sin embargo, en el fallo se permitía el uso de "métodos de interrogatorio físicos" en situaciones de "amenaza inminente" y eludir la responsabilidad aduciendo "estado de necesidad", lo que daba por resultado la impunidad de los miembros de la Agencia de Seguridad de Israel¹⁷. AI pidió a Israel que: investigara todas las denuncias de tortura u otros malos tratos de manera inmediata, exhaustiva e imparcial mediante un órgano independiente; procesara a los responsables y ofreciera reparación a las víctimas, tal como había acordado en el EPU anterior; prohibiera de forma absoluta las torturas, anulando la posibilidad de aducir "estado de necesidad" en situaciones de "amenaza inminente", y declarara inadmisibles en los tribunales las pruebas obtenidas bajo coacción¹⁸.

15. Front Line instó a Israel a que: llevara a cabo una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre el origen de las amenazas, los malos tratos, la tortura y todas las formas de intimidación y acoso, así como sobre los juicios no imparciales y las detenciones arbitrarias iniciales de las que son objeto los defensores de los derechos

humanos mencionados en su informe; garantizara el acceso inmediato a un abogado; acabara con las detenciones administrativas de los defensores de los derechos humanos; rechazara los proyectos de ley que minaran la labor de las ONG y los defensores de los derechos humanos, y velara por que los defensores de los derechos humanos en Israel y el territorio palestino ocupado pudieran llevar a cabo sus actividades sin ser perseguidos¹⁹.

16. La comunicación conjunta 3-Consejo de Organizaciones Palestinas de Derechos Humanos (JS3-PHROC) se refirió a las denuncias de malos tratos contra los niños palestinos detenidos, que en algunos casos llegaban a la tortura. A pesar de las recientes enmiendas a las órdenes militares, en virtud de las cuales se había creado un tribunal militar de menores y se pretendía elevar la mayoría de edad de los 16 a los 17 años en los tribunales militares, la JS3-PHROC señaló que no se había producido ningún efecto positivo palpable en el trato que recibían los niños durante las primeras 48 horas de detención²⁰.

17. La JS3-PHROC indicó que las autoridades militares israelíes habían seguido recurriendo a la detención administrativa en contravención de las normas establecidas por el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y el derecho consuetudinario²¹. La CIJ instó a Israel a: poner fin al uso abusivo de la detención administrativa y garantizar que es una medida excepcional de duración limitada; velar por que el internamiento de las personas en detención administrativa sea revisado periódicamente por tribunales o juntas administrativas independientes e imparciales; y garantizar el derecho de los detenidos palestinos a permanecer encarcelados dentro del territorio palestino ocupado²². AI exhortó además a Israel a garantizar que ningún preso o detenido sería castigado por protestas no violentas, como la huelga de hambre²³.

18. CIVICUS señaló que, entre 2009 y 2012, las Fuerzas de Defensa de Israel recurrieron a métodos violentos de manera habitual, desproporcionada, excesiva y algunas veces letal para dispersar a manifestantes, tanto en los territorios ocupados como en los Estados vecinos. Por otra parte, los activistas palestinos de la sociedad civil habían sido objeto de detenciones y encarcelamientos arbitrarios por organizar protestas no violentas en los territorios ocupados o participar en ellas²⁴. CIVICUS recomendó, entre otras cosas, que se equipara a las fuerzas de seguridad antidisturbios con armas no letales y se proporcionara formación, en particular sobre los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego²⁵.

19. Reporteros sin Fronteras (RSF) señaló que los medios de comunicación palestinos ubicados en los territorios ocupados habían sido cerrados de manera arbitraria e ilegal²⁶ y que las órdenes de detención administrativa se utilizaban de manera habitual para detener y retener a los periodistas palestinos sin cargos²⁷.

20. La JS3-PHROC declaró que los ciudadanos de la Franja de Gaza detenidos en virtud de la Ley de detención de combatientes ilegales de 2002, modificada en 2008, no eran considerados prisioneros de guerra ni civiles detenidos, por lo que prácticamente quedaban privados de los derechos y medidas de protección previstos por el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos²⁸.

21. La JS3-PHROC señaló que las continuas y severas medidas punitivas contra los presos palestinos habían provocado cuadros de angustia psicológica grave, que los habían empujado a iniciar huelgas de hambre generalizadas en 2011 y 2012²⁹.

22. La Iniciativa global para acabar con todo castigo corporal hacia niños y niñas señaló que se infligían castigos corporales a los niños y las niñas en las instituciones penales, tanto de Israel como de los territorios ocupados³⁰. La Iniciativa esperaba que el Consejo tomara nota de que se había logrado reformar la ley para prohibir el castigo corporal, y recomendó a Israel que la aplicara y que suprimiera ese castigo en la práctica³¹.

3. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad

23. Human Rights Watch (HRW) recomendó que: se llevaran a cabo investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales de todos los incidentes en los que fuerzas militares y de policía de Israel podían haber sido responsables de violaciones de los derechos humanos, en particular en la Franja de Gaza; y que se velara por que se adoptaran medidas adecuadas para investigar y procesar a los civiles israelíes que atacaran a los palestinos o a sus bienes³². El Centro Mosawa formuló recomendaciones similares³³.

24. La comunicación de Human Rights Alert (HRA) se centró en la falta de integridad de los sistemas de registro electrónico del Tribunal Supremo, el Tribunal de Distrito y los tribunales encargados de las detenciones administrativas³⁴.

25. La JS3-PHROC señaló que, desde el EPU de Israel de 2008, no se habían adoptado medidas legislativas ni prácticas para garantizar que los juicios de palestinos en tribunales militares cumplieran las normas mínimas de un juicio imparcial consagradas en el derecho internacional³⁵.

4. Derecho a la vida familiar

26. En 2012, el Tribunal Supremo de Israel rechazó una solicitud de derogación de una ley de 2003, renovada semestralmente, que prohibía la reunificación familiar de los israelíes casados con palestinos de los territorios ocupados³⁶. AI recomendó que se derogara Ley de ciudadanía y entrada en Israel que impedía la reunificación familiar de los ciudadanos israelíes con sus cónyuges de los territorios palestinos ocupados³⁷. La Sociedad para los Pueblos Amenazados³⁸ (STP) y el Centro Mossawa³⁹ expresaron preocupaciones similares.

27. NGO Monitor señaló que no había restricciones raciales ni étnicas en relación con la capacidad para adquirir la nacionalidad israelí. La Ley de retorno de Israel establecía una vía especial para los judíos que deseaban obtener la nacionalidad debido a la persecución histórica del pueblo judío⁴⁰.

5. Libertad de circulación

28. Front Line Defenders (Front Line) se refirió a una política de visados adoptada en 2009, que restringía el movimiento del personal de las ONG y afectaba a las ONG internacionales que prestaban asistencia a la población palestina, en especial en la Franja de Gaza⁴¹. Instó a Israel a que pusiera fin a las restricciones a la libertad de circulación y levantara la prohibición de viajar a los defensores de los derechos humanos⁴².

29. HRW señaló que la "barrera de separación" restringía los movimientos de los palestinos, mermando sus medios de vida y limitando su acceso a la atención médica, la educación y otros recursos. Israel exigía a los palestinos que obtuvieran la autorización previa de los militares para acceder a sus tierras de cultivo⁴³. La JS3-PHROC planteó preocupaciones similares⁴⁴.

30. AI indicó que la valla/muro, que seguía en proceso de construcción, creaba una restricción arbitraria de la libertad de circulación de los palestinos, que había dado lugar a violaciones de sus derechos a un nivel de vida adecuado y a la salud, entre otros⁴⁵. AI hizo referencia a más de 500 puestos de control y controles de carretera de la Ribera Occidental que limitaban la circulación y el acceso⁴⁶. AI pidió a Israel, entre otras cosas, que velara por que se respetaran los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado, así como otros derechos que dependen del derecho a la libertad de circulación⁴⁷. La Islamic Human Rights Commission (IHRC) expresó preocupaciones similares⁴⁸. El Centro Palestino para los Derechos Humanos recomendó a Israel que levantara las restricciones impuestas a las importaciones, las exportaciones y la circulación de personas⁴⁹.

31. La JS3-PROHC indicó que las políticas, leyes y prácticas de Israel —como el Muro de Anexión, la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas, la revocación de los derechos de residencia, los desalojos, la denegación del derecho de retorno, las restricciones al acceso a los recursos naturales y la denegación de la reunificación familiar y la libertad de circulación— estaban provocando el traslado gradual forzoso de la población ocupada y la anexión de las tierras palestinas por la fuerza⁵⁰.

6. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política

32. El Centro Mossawa señaló que se seguía prohibiendo la presencia de la comunidad beduina de Be'er Sheva en los lugares públicos de culto e instó a Israel a que protegiera los derechos religiosos de las minorías⁵¹.

33. La comunicación conjunta 2 (JS2) se refirió a la falta de disposiciones adecuadas para la objeción de conciencia al servicio militar, la participación militar en la educación y el reclutamiento de niños, el acoso a las organizaciones que cuestionaban el comportamiento de los militares y la discriminación que sufrían las personas que no cumplían el servicio militar⁵². También mencionó las preocupaciones expresadas por el Comité de Derechos Humanos acerca de la imparcialidad de los órganos militares que determinaban los casos de objeción⁵³. Con respecto a la recomendación 100.22 del EPU⁵⁴, la JS2 señaló que se seguía encarcelando a los objetores de conciencia⁵⁵.

34. NGO Monitor indicó que la democracia israelí era sólida y plural, y que no se imponían restricciones a ninguna forma de protesta o de apoyo, incluidas las críticas feroces e impopulares al Gobierno y a las fuerzas armadas⁵⁶.

35. RSF se refirió a la política que se aplicaba a los medios de comunicación palestinos y a los periodistas extranjeros que deseaban cubrir los territorios palestinos, así como a la prohibición a los periodistas israelíes de visitar la Franja de Gaza⁵⁷. Durante la operación militar israelí "Plomo Fundido", Israel denegó el acceso de los medios de comunicación internacionales a la Franja de Gaza "por razones de seguridad"⁵⁸. RSF registró violaciones de la libertad de prensa contra fotógrafos palestinos, israelíes y extranjeros que informaban sobre las protestas contra el muro de separación y la construcción de asentamientos israelíes⁵⁹. RSF recomendó, entre otras cosas, que cesaran los ataques contra los periodistas; se pusiera fin al cierre arbitrario de medios de comunicación palestinos y se devolvieran los equipos confiscados; se procesara a los soldados responsables de vulnerar los derechos del personal de los medios de comunicación; se solicitara la concesión de indemnizaciones a las víctimas; y se permitiera que los periodistas israelíes visitaran los territorios ocupados⁶⁰.

36. AI pidió a Israel que pusiera en libertad a todas las personas detenidas por el ejercicio no violento de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión⁶¹.

37. RSF se refirió a la persecución de un periodista y una fuente de un diario israelí⁶², así como a un proyecto de ley por el que se endurecían las leyes israelíes relativas a la difamación, que había sido aprobado en 2011 por el Knesset. El objetivo del proyecto de ley era ahogar económicamente a los medios de comunicación de Israel e intimidar a los periodistas que se atrevían a denunciar la corrupción y criticar al Gobierno⁶³. RSF recomendó a Israel, entre otras cosas, que suprimiera la censura militar y abandonara el proyecto de ley de difamación aprobado en primera lectura en 2011⁶⁴.

38. Front Line informó de que en 2010 y 2011 se habían aprobado varios proyectos de ley que restringían la libertad de asociación y de expresión, y discriminaban a las ONG no judías, en particular los proyectos de ley de transparencia en la financiación de las ONG y de prohibición de la imposición de un boicot⁶⁵. NGO Monitor señaló que el 22 de febrero de 2011 el Knesset había aprobado la Ley de transparencia en la financiación de las ONG,

que exigía que las organizaciones sin ánimo de lucro presentaran un informe trimestral de una página sobre cualquier donación de un gobierno extranjero de más de 20.000 NSI. Observó que la transparencia financiera y el derecho del público a recibir información eran principios fundamentales de la democracia⁶⁶.

39. NGO Monitor señaló que el Gobierno israelí debía ser felicitado por permitir que las ONG actuaran libremente, aun cuando muchas defendían un programa en el que Israel era demonizado, a menudo con afirmaciones infundadas o falsas⁶⁷. NGO Monitor comentó que las actividades de la sociedad civil israelí no eran objeto de censura y que Israel protegía sistemáticamente el derecho de las poblaciones minoritarias a la libertad de expresión y a la protesta⁶⁸.

40. El Centro Mossawa recomendó que se instara a Israel a que velara por que no se restringiera el establecimiento ni el funcionamiento de las ONG⁶⁹.

41. CIVICUS recomendó, entre otras cosas, que se derogara la Orden Militar 101, que imponía limitaciones importantes a la libertad de reunión⁷⁰. CIVICUS proporcionó información sobre casos de acoso y detención arbitraria de defensores de los derechos humanos, incluso por haber cooperado con las Naciones Unidas⁷¹.

42. Ir Amin señaló que los residentes palestinos de Jerusalén Oriental no tenían derecho a votar ni a ser elegidos para ocupar un puesto en las instituciones del Gobierno central de Israel. Podían votar, y podían presentar sus candidaturas a puestos del municipio de Jerusalén, pero no al de alcalde⁷².

43. El Centro Mossawa indicó que el Comité Electoral Central de Israel había prohibido a dos partidos políticos árabes del Knesset que participaran en las elecciones de 2009, alegando que no reconocían el carácter judío del Estado. El Centro Mossawa instó a Israel a velar por que los líderes políticos y de la sociedad civil árabes gozaran de igualdad de derechos civiles y políticos⁷³.

7. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

44. La JS4 instó a Israel a que aplicara las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho al trabajo y que pusiera fin a las restricciones relativas a la circulación y los permisos de trabajo, así como a las políticas desiguales y discriminatorias adoptadas en el territorio palestino ocupado, que ponían trabas al derecho al trabajo de los palestinos⁷⁴.

45. El Centro Mossawa indicó que en la contratación de funcionarios de la administración pública se daba prioridad a los solicitantes que habían hecho el servicio militar. Hizo un llamamiento a Israel para que garantizara el disfrute del derecho al trabajo, en igualdad de condiciones, a la minoría árabe; aumentara las oportunidades de empleo en las localidades árabes; y redoblara los esfuerzos para lograr la igualdad en el acceso al empleo de las mujeres árabes⁷⁵.

8. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

46. Ir Amim señaló que solo un pequeño porcentaje de los residentes en Jerusalén Oriental estaba cubierto por el sistema de bienestar social, que carecía de fondos suficientes⁷⁶.

47. AI se refirió a los desalojos forzosos de los palestinos de Jerusalén Oriental y las zonas designadas como "Zona C" en los Acuerdos de Oslo y a la expansión de los asentamientos exclusivamente israelíes⁷⁷. AI pidió a Israel que detuviera las demoliciones de viviendas y los desalojos forzosos en el territorio palestino ocupado; velara por el acceso de las víctimas a recursos y medidas de reparación; traspasara las competencias de planificación a las comunidades palestinas; retirara los asentamientos israelíes del territorio

palestino ocupado; y enjuiciara a los colonos israelíes que cometieran actos de violencia contra los palestinos, e indemnizara a las víctimas⁷⁸.

48. HRW señaló que Israel seguía erigiendo la "barrera de separación" dentro de la Ribera Occidental y que recientemente la había ampliado haciendo que atravesara las comunidades palestinas de los alrededores de Jerusalén⁷⁹. Ir Amim se refirió a la situación de los residentes palestinos de ocho barrios de Jerusalén Oriental, que se habían quedado al otro lado de la barrera de separación y no tenían acceso a los servicios municipales⁸⁰.

49. El Centro de Vigilancia de los Desplazados Internos (IDMC) señaló que casi el 70% de las tierras de la Ribera Occidental seguían sin estar registradas, lo que hacía a los propietarios y residentes tradicionales vulnerables a la confiscación o expropiación por las autoridades israelíes⁸¹. La Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (ACPG-XXIII) informó de que Israel, a través de un complejo mecanismo burocrático-jurídico, declaraba las tierras "propiedad del Estado". Entre los métodos utilizados, cabía destacar la confiscación de tierras por "necesidades militares", la declaración de las tierras como "propiedad abandonada" o "zona militar temporal" y la expropiación por "necesidad pública"⁸². En Jerusalén Oriental, el registro de tierras era igualmente complicado⁸³.

50. La comunicación conjunta 1 (JS1) se refirió al control de Israel sobre las fuentes de recursos hídricos de los territorios palestinos ocupados y señaló que Israel debía garantizar un acceso adecuado de los palestinos al agua y a los servicios de saneamiento⁸⁴. La JS4 expresó preocupaciones similares⁸⁵.

9. Derecho a la salud

51. La JS4 instó a Israel a que garantizara a todos el acceso universal a la atención primaria de salud asequible⁸⁶.

10. Derecho a la educación

52. La ACPG-XXIII informó de que los niños palestinos de las colinas del sur de Hebrón acudían a la escuela escoltados por militares israelíes debido a los repetidos ataques perpetrados por colonos israelíes⁸⁷. La ACPG-XXIII señaló que los niños de Jinba, Al Fakhit y Susiya no gozarían del derecho a la educación si las autoridades israelíes daban curso a una orden de demolición dictada en febrero de 2012⁸⁸.

53. Ir Amim indicó que, debido al deterioro del sistema educativo árabe en Jerusalén las instalaciones eran manifiestamente insuficientes e inadecuadas y las tasas de abandono escolar habían aumentado.⁸⁹ El Centro Mossawa instó a Israel a que garantizara el disfrute, en condiciones de igualdad, del derecho a la educación, con independencia de la nacionalidad⁹⁰. La JS4 pidió a Israel que aplicara las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y garantizara el derecho a la educación de los niños palestinos en el territorio palestino ocupado⁹¹.

11. Derechos culturales

54. El Centro Mossawa instó a Israel a que garantizara el derecho de la minoría árabe a disfrutar de su cultura y su idioma⁹².

12. Minorías y pueblos indígenas

55. El Negev Coexistence Forum for Civil Society Equality (NCF) se refirió a la recomendación 28⁹³, aceptada por Israel, e indicó que Israel no había cumplido los compromisos adquiridos con la comunidad beduina. NCF señaló: la disparidades en el nivel de servicios ofrecidos en los municipios beduinos y judíos del Negev, el bajo nivel de representación de los beduinos en las oficinas del Gobierno y el hecho de que no se hubiera

consultado a la comunidad beduina sobre la política estatal de demolición de viviendas y el Plan Praver⁹⁴. El Centro Mossawa⁹⁵ y la JS4⁹⁶ expresaron preocupaciones similares.

56. HRW señaló que las aldeas beduinas habían sido excluidas del proceso de planificación nacional de Israel y carecían de condición jurídica⁹⁷. Según el NCF⁹⁸, los beduinos que vivían en "aldeas no reconocidas" no tenían acceso a los servicios básicos, los centros médicos ni las escuelas. AI mostró preocupación por los repetidos casos de derribo de hogares de beduinos palestinos⁹⁹. La STP¹⁰⁰ y el Centro Mossawa¹⁰¹ plantearon preocupaciones similares.

57. El IDMC informó de que, desde 2011, la Administración Civil de Israel (ICA) ha manifestado en varias ocasiones su intención de reubicar por la fuerza a los beduinos y las comunidades de pastores de la Zona C¹⁰².

13. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

58. En 2012, el Parlamento de Israel aprobó la Ley de prevención de infiltraciones, que ordenaba la detención de toda persona, incluidos los solicitantes de asilo, que entrara en Israel sin permiso¹⁰³. AI pidió a Israel que garantizara que el trato dispensado a los refugiados y los solicitantes de asilo se ajustara a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951¹⁰⁴.

59. La IHRC señaló que se había denegado a 5 millones de refugiados palestinos el derecho a regresar a su patria¹⁰⁵.

14. Desplazados internos

60. IDMC expresó preocupación por las políticas y prácticas de Israel, que provocaban el desplazamiento forzoso de los palestinos de los territorios palestinos ocupados¹⁰⁶ mediante el derribo de edificios civiles, los desalojos forzados, la expropiación de tierras, los asentamientos y su expansión, la construcción del muro, las restricciones de la circulación y el acceso, los actos de violencia de los colonos y las operaciones militares¹⁰⁷.

15. Situación existente en determinadas regiones o territorios o relacionada con ellos

61. AI señaló que Israel seguía negando que el derecho internacional de los derechos humanos y el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra fueran aplicables en los territorios palestinos ocupados, y que no había dado seguimiento a las recomendaciones formuladas en relación con ese tema durante el primer EPU. AI indicó que Israel estaba en desacuerdo con la comunidad internacional, incluida la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que sostenía que todos los convenios y tratados de las Naciones Unidas ratificados por Israel eran aplicables en los territorios palestinos ocupados. Además, el establecimiento de asentamientos israelíes violaba el IV Convenio de Ginebra, que prohibía a la Potencia ocupante efectuar el traslado de la propia población civil al territorio por ella ocupado¹⁰⁸. El IDMC¹⁰⁹, el Israeli Committee against House Demolitions (ICAH)¹¹⁰, la JS1¹¹¹, el Centro Palestino para los Derechos Humanos¹¹², la JS4¹¹³, la JS3-PROHC¹¹⁴, la Organización de Defensa de las Víctimas de la Violencia¹¹⁵ y la CIJ¹¹⁶ expresaron preocupaciones similares. AI pidió a Israel que aceptara la aplicabilidad de los tratados de derechos humanos y del IV Convenio de Ginebra en el territorio palestino ocupado¹¹⁷. La CIJ instó a Israel a que pusiera fin a la política de asentamientos ilegales en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental¹¹⁸.

62. La JS4 señaló que Israel no había aplicado las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad en el territorio palestino ocupado y otros territorios árabes, ni las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos en los que Israel era parte. La JS4 instó al Consejo a

que exhortara a Israel a cumplir las obligaciones impuestas en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario¹¹⁹. La JS4 pidió a Israel que colaborase con los mecanismos de derechos humanos¹²⁰.

63. AI señaló que Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza la misión de estudio de las Naciones Unidas sobre el conflicto de Gaza tras la operación "Plomo Fundido", 2008-2009, había detectado crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad, que Israel había negado. Desde entonces, el Abogado General Militar de Israel había presentado acusaciones contra cuatro militares por delitos cometidos en tres incidentes distintos relacionados con el conflicto de Gaza de 2008-2009¹²¹. La CIJ instó a Israel a: investigar de manera inmediata, exhaustiva, imparcial e independiente todas las denuncias de violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas durante la operación "Plomo Fundido"; velar por que los responsables rindan cuentas en juicios imparciales; y proporcionar un recurso efectivo y una reparación plena a todas las víctimas¹²². El Centro Palestino para los Derechos Humanos señaló que el sistema judicial de Israel no había ofrecido justicia ni reparación a las víctimas¹²³. La JS3-PHROC afirmó que Israel no había investigado denuncias dignas de crédito sobre delitos cometidos en el marco de la operación "Plomo Fundido"¹²⁴.

Notas

¹ The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: www.ohchr.org.

Civil society:

ACPG-XXIII	Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Italy;
AI	Amnesty International, London, UK;
CIVICUS	WorldAlliance for Citizen Participation, South Africa;
Front Line	FrontLine Defenders, Dublin-Brussels;
GIEACPC	GlobalInitiative to End All Corporal Punishment of Children, London, UK;
HRA	Human Rights Alert, Jerusalem, Israel;
HRW	Human Rights Watch, Geneva, Switzerland;
ICAHD	Israeli Committee Against House Demolition (ICAHD), Jerusalem, Israel;
ICJ	InternationalCommission of Jurists Geneva, Switzerland;
IDMC	Internal Displacement Monitoring Centre, Geneva, Switzerland;
IHRC	Islamic Human Rights Commission, London, UK;
Ir Amim	IrAmim, Jerusalem, Israel;
JS1	Joint submission 1 - Applied Research Institute – Jerusalem (ARIJ) - MA'AN Development Center (with the support of EWASH Advocacy Task Force), Jerusalem, Israel;
JS2	Joint submission 2 - International Fellowship of Reconciliation (IFOR) and Conscience and Peace Tax International (CPTI), The Netherlands-Belgium;
JS3-PHROC	Joint submission 3 - Palestinian Human Rights Organisations Council Ramallah: Addameer Prisoners; Aldameer Association for Human Rights; Al-Haq; Al Mezan Center for Human Rights; Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights; Defence for Children International-Palestine Section; Ensan Center for Human Rights and Democracy; Hurryyat-Centre for Defense of Liberties and Civil Rights; Jerusalem Center for Legal Aid and Human Rights; Ramallah Center for Human Rights Studies; Women's Centre for Legal Aid and Counselling; West Bank, Palestine;
JS4	Joint submission 4 - Arab NGO Network for Development and Mossawa Center, Beirut, Lebanon - The Advocacy Center for Arab Citizens in Israel, Israel;
Mossawa Center	Mossawa Center, Haifa, Israel;
NCF	NCFInternational, Israel;

- NGO Monitor NGO Monitor, Jerusalem, Israel;
 ODVV Organization for Defending Victims of Violence, Teheran, Iran;
 PCHR Palestinian Centre for Human Rights, Gaza;
 RWB Reporters Without Borders, Paris, France;
 STP Society for Threatened Peoples, Germany.
- ² NGO Monitor, pages 2 and 3.
- ³ JS4- Arab NGO Network for Development and Mossawa Center - The Advocacy Center for Arab Citizens, pages 2-3.
- ⁴ JS4- Arab NGO Network for Development and Mossawa Center - The Advocacy Center for Arab Citizens, page 4.
- ⁵ «Establish an independent national human rights institution in accordance with the Paris Principles (France, Jordan, Philippines), A/HRC/10/76, paragraph 100.6.
- ⁶ JS4- Arab NGO Network for Development and Mossawa Center - The Advocacy Center for Arab Citizens, page 4.
- ⁷ AI, page 2.
- ⁸ ICJ, page 5.
- ⁹ ICJ, page 4.
- ¹⁰ CIVICUS, paragraph 6. 6.
- ¹¹ Mossawa Center, page 2.
- ¹² Mossawa Center, page 4.
- ¹³ NGO Monitor, page 2.
- ¹⁴ Ir Amim, page 1.
- ¹⁵ Ir Amim, pages 3-5.
- ¹⁶ AI, pages 3 and 5.
- ¹⁷ AI, page 1.
- ¹⁸ AI, page 4. See also submission from JS3-PHROC Palestinian Human Rights Organisations Council, pages 5-6.
- ¹⁹ Front Line Defenders, page 4. See also submission from JS3-PHROC Palestinian Human Rights Organisations Council, page 6.
- ²⁰ JS3-PHROC Palestinian Human Rights Organisations Council, page 5. See also IHRC.
- ²¹ JS3-PHROC Palestinian Human Rights Organisations Council, pages 4-5. See also submission from AI (including cases cited), page 3 and submission from IHRC.
- ²² ICJ, page 5. See also recommendations from AI, page 5.
- ²³ AI, page 5. See also recommendations from ICJ, page 5.
- ²⁴ CIVICUS, pages 2-3. See submission for cases cited.
- ²⁵ CIVICUS, page 6.
- ²⁶ RWB, pages 3-4. See submission for cases cited.
- ²⁷ RWB, page 4. See submission for cases cited.
- ²⁸ JS3-PHROC Palestinian Human Rights Organisations Council, page 7.
- ²⁹ JS3-PHROC Palestinian Human Rights Organisations Council, page 5.
- ³⁰ GIEACPC, page 2.
- ³¹ GIEACPC, page 1.
- ³² HRW, page 2. See submission for cases cited. See also submission from Mossawa Centre, page 3.
- ³³ Mossawa Center, pages 3-4.
- ³⁴ HRA, pages 1-5.
- ³⁵ JS3-PHROC Palestinian Human Rights Organisations Council, page 6.
- ³⁶ AI, page 2. See submission for cases cited.
- ³⁷ AI, page 4. See also HRW, pages 4-5.
- ³⁸ STP, page 2.
- ³⁹ Mossawa Center, page 2.
- ⁴⁰ NGO Monitor, page 2.
- ⁴¹ Front Line Defenders, page 3. See submission for cases cited.
- ⁴² Front Line Defenders, page 4.
- ⁴³ HRW, page 4.
- ⁴⁴ JS3-PHROC Palestinian Human Rights Organisations Council, pages 9-10.
- ⁴⁵ AI, page 2.
- ⁴⁶ AI, page 4.

- 47 AI, page 5. See also submission from HRW, pages 2-3.
- 48 IHRC, page 4. See also submission from Palestinian Centre for Human Rights.
- 49 Palestinian Centre for Human Rights, page 3.
- 50 JS3-PHROC Palestinian Human Rights Organisations Council, pages 3-4.
- 51 Mossawa Center, page 2.
- 52 Joint submission 2 - International Fellowship of Reconciliation (IFOR) and Conscience and Peace Tax International (CPTI), The Netherlands-Belgium, pages 1-7. See submission for cases cited. See also AI submission, pages 1-2.
- 53 Joint submission 2 - International Fellowship of Reconciliation (IFOR) and Conscience and Peace Tax International (CPTI), The Netherlands-Belgium, paragraph 25.
- 54 *“Cease imprisoning conscientious objectors and consider granting them the right to serve instead with a civilian body independent of the military (Slovenia)”*, A/HRC/10/76, paragraph 100.22.
- 55 Joint submission 2 - International Fellowship of Reconciliation (IFOR) and Conscience and Peace Tax International (CPTI), The Netherlands-Belgium, paragraphs 9 and 15. See submission for cases cited.
- 56 NGO Monitor, page 4.
- 57 RWB, page 3. See submission for cases cited.
- 58 RWB, page 3.
- 59 RWB, page 5. See submission for cases cited.
- 60 RWB, page 6.
- 61 AI, page 5. See also submission from Mossawa Centre, pages 2-3.
- 62 RWB, pages 1-2. See submission for cases cited.
- 63 RWB, page 2. See also submission from CIVICUS, page 4. See submission for cases cited.
- 64 RWB, page 2.
- 65 Front Line Defenders pages 1-2. See also submission from CIVICUS, pages 3-4.
- 66 NGO Monitor, page 4.
- 67 NGO Monitor, page 4.
- 68 NGO Monitor, pages 4-5.
- 69 Mossawa Centre, page 3.
- 70 CIVICUS, page 6.
- 71 CIVICUS, paragraphs 4.1 to 4.4. See submission for cases cited.
- 72 Ir Amim, page 1.
- 73 Mossawa Centre, page 3.
- 74 JS4- Arab NGO Network for Development and Mossawa Center - The Advocacy Center for Arab Citizens, page 7.
- 75 Mossawa Centre, page 4.
- 76 Ir Amim, page 5. See also submission from JS4- Arab NGO Network for Development and Mossawa Center - The Advocacy Center for Arab Citizens, page 6.
- 77 AI, page 4.
- 78 AI, page 5. See also submission from HRW (page 2), JS3-PHROC Palestinian Human Rights Organisations Council (pages 8-9) and ACPG-XXIII (page 3).
- 79 HRW, page 4. See also submission from ICJ.
- 80 Ir Amim, pages 6-7.
- 81 IDMC, page 2.
- 82 ACPG-XXIII, pages 3-4.
- 83 IDMC, paragraph 6.
- 84 JS1 - Applied Research Institute (ARIJ) - MA’AN Development Center (with the support of EWASH Advocacy Task Force), page 2.
- 85 JS4- Arab NGO Network for Development and Mossawa Center - The Advocacy Center for Arab Citizens, page 6.
- 86 JS4- Arab NGO Network for Development and Mossawa Center - The Advocacy Center for Arab Citizens, page 9.
- 87 ACPG-XXIII, page 5. See submission for cases cited.
- 88 ACPG-XXIII, page 5.
- 89 Ir Amim, page 7.
- 90 Mossawa Centre, page 5.

- ⁹¹ JS4- Arab NGO Network for Development and Mossawa Center - The Advocacy Center for Arab Citizens, page 8.
- ⁹² Mossawa Centre, page 5.
- ⁹³ «Ensure that the rights minorities are fully protection (United Kingdom)», A/HRC/10/76, paragraph 100.28.
- ⁹⁴ NCF, pages 1-4.
- ⁹⁵ Mossawa Centre, page 6.
- ⁹⁶ JS4- Arab NGO Network for Development and Mossawa Center - The Advocacy Center for Arab Citizens, page 10.
- ⁹⁷ HRW, page 5.
- ⁹⁸ NCF, page 2.
- ⁹⁹ AI, page 2. See submission for cases cited.
- ¹⁰⁰ STP, pages 1-2. See submission for cases cited.
- ¹⁰¹ Mossawa Centre, page 5.
- ¹⁰² IDMC, paragraph 20.
- ¹⁰³ AI, page 3. See also submission from HRW, page 5.
- ¹⁰⁴ AI, page 5. See also submission from HRW, page 5.
- ¹⁰⁵ IHRC, pages 4-5.
- ¹⁰⁶ IDMC, paragraph 2.
- ¹⁰⁷ IDMC, paragraph 2.
- ¹⁰⁸ AI, page 2.
- ¹⁰⁹ IDMC, page 1.
- ¹¹⁰ ICAHD, pages 1-5.
- ¹¹¹ JS1 - Applied Research Institute (ARIJ) - MA'AN Development Center (with the support of EWASH Advocacy Task Force), page 2.
- ¹¹² Palestinian Centre for Human Rights, page 1.
- ¹¹³ JS4- Arab NGO Network for Development and Mossawa Center - The Advocacy Center for Arab Citizens, page 2.
- ¹¹⁴ JS3-PHROC Palestinian Human Rights Organisations Council, page 1.
- ¹¹⁵ ODVV, pages 1-5.
- ¹¹⁶ ICJ, page 1.
- ¹¹⁷ AI, page 5.
- ¹¹⁸ ICJ, page 4.
- ¹¹⁹ JS4- Arab NGO Network for Development and Mossawa Center - The Advocacy Center for Arab Citizens, page 3.
- ¹²⁰ JS4- Arab NGO Network for Development and Mossawa Center - The Advocacy Center for Arab Citizens, page 4.
- ¹²¹ AI, page 3. See also submission from ICJ.
- ¹²² ICJ, page 4. See also submission from AI, page 5.
- ¹²³ Palestinian Centre for Human Rights, page 4.
- ¹²⁴ JS3-PHROC Palestinian Human Rights Organisations Council, pages 7-8. See submission for cases cited.
-